

25/03/2019

COD: A103

ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PRIMER EJERCICIO
SEGUNDA PRUEBA**

**Tiempo máximo: 120 minutos
Preguntas: 120.**

MODELO / EREDUA:	A
------------------	----------

- No abra el cuadernillo hasta que se le indique.
- Marque en la hoja de respuestas el modelo que le haya correspondido.
- A la finalización de la prueba recoja este cuadernillo, la copia amarilla de su hoja de respuestas y la hoja de instrucciones.
- Recuerde:
 - Aciertos: 1,00
 - Errores, nulos, dobles o blancos: no descuentan.
- La ausencia de marca o la marca incorrecta en el modelo invalida la prueba.
- No se entregaran nuevas hojas de respuesta en los últimos 5 minutos del ejercicio.
- Cuando finalice levante la mano y el personal de la organización recogerá la hoja de color blanco
- No se recogen exámenes individualmente en los últimos 3 minutos del ejercicio. Si ha finalizado permanezca en su sitio en silencio hasta la recogida final.

Gracias por su colaboración

- 1.- Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. De acuerdo con el artículo 124-4 g), la función de dictar bandos, decretos e instrucciones corresponde:
- A la Junta de Gobierno Local.
 - Al Pleno.
 - Al Alcalde.
 - A la Asesoría jurídica municipal.
- 2.- Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Según su artículo 49, la aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento:
- Aprobación inicial por el Pleno, información pública y audiencia a los interesados.
 - Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo
 - Aprobación definitiva por el Pleno.
 - Todas las letras anteriores.
- 3.- Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Según su artículo 70.2, las Ordenanzas locales, salvo los presupuestos y ordenanzas fiscales, entran en vigor:
- Con la publicación de su texto en el tablón de anuncios municipal.
 - Con la publicación de su texto completo en el "Boletín Oficial" de la Provincia
 - Con la publicación de su texto completo en el "Boletín Oficial" de la Provincia y el transcurso del plazo previsto en el artículo 65.2 de dicha Ley.
 - Con la publicación de su texto completo en el Boletín Oficial del Estado y el transcurso del plazo previsto en el artículo 65.2 de dicha Ley.
- 4.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De acuerdo con su artículo 129, en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de:
- Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica y transparencia.
 - Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
 - Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, acceso universal y transparencia.
 - Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y buen gobierno.
- 5.- Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Según su artículo 141, salvo previsión legal distinta, las multas por infracción leve de Ordenanzas locales deberá respetar la siguiente cuantía:
- Desde 750 euros.
 - Hasta 300 euros.
 - Hasta 750 euros.
 - De 50 a 500 euros.
- 6.- Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi. Según su artículo 9-5, la autonomía municipal comprende, en todo caso, ...(señale la opción INCORRECTA):
- La organización de su propio territorio.
 - La iniciativa económica.
 - La organización y gestión de los órganos de gobierno y administración de los concejos.
 - El patrimonio y recaudación.
- 7.- Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi. Según su artículo 25, las candidaturas a elecciones locales procurarán incluir, dentro de los puestos que disponen hipotéticamente de posibilidades de elección, conforme a los últimos resultados electorales locales, una representación paritaria de mujeres y hombres, de forma que cada sexo esté representado, al menos,
- Al 35%
 - Al 40 %
 - Al 45%
 - Al 50%
- 8.- Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. Según su artículo 3, son bienes de uso público local...(señale la opción INCORRECTA):
- Las piscinas municipales.
 - Los caminos.
 - Las calles.
 - Las plazas.

- 9.- Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. Según su artículo 6, los bienes patrimoniales se rigen por:
- Su legislación específica.
 - El ordenamiento privado.
 - Su legislación específica y, en su defecto, por las normas de Derecho privado.
 - Por las Ordenanzas fiscales.
- 10.- Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. De acuerdo con su artículo 8, la alteración de la calificación jurídica de los bienes de las Entidades locales requiere expediente en el que se acrediten:
- Su oportunidad y legalidad.
 - Su oportunidad y diversidad.
 - Su legalidad y vigencia.
 - Su legalidad y competencia.
- 11.- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Según su artículo 15, las Administraciones públicas podrán adquirir bienes y derechos por cualquiera de los modos previstos en el ordenamiento jurídico y, en particular, por los siguientes...(señale la opción INCORRECTA):
- Por prescripción.
 - Por ocupación.
 - Por consecución.
 - Por atribución de la ley
- 12.- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Según su artículo 41, para la defensa de su patrimonio, las Administraciones públicas tendrán las siguientes facultades y prerrogativas (señale la opción INCORRECTA):
- Deslindar en vía administrativa los inmuebles de su titularidad.
 - Realizar el inventario de los bienes y derechos que integran su patrimonio.
 - Recuperar de oficio la posesión indebidamente perdida sobre sus bienes y derechos.
 - Investigar la situación de los bienes y derechos que presumiblemente pertenezcan a su patrimonio.
- 13.- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Según su artículo 93, sin perjuicio de circunstancias excepcionales, debidamente justificadas, o en otros supuestos establecidos en las leyes, el otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público se efectuará en régimen de:
- Estimación.
 - Connivencia.
 - Concurrencia.
 - Participación.
- 14.- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Según su artículo 100, las concesiones y autorizaciones demaniales se extinguirán por las siguientes causas (señale la opción INCORRECTA):
- Mutuo acuerdo.
 - Desaparición del bien.
 - Ejercicio del derecho de adquisición preferente.
 - Falta de pago del canon.
- 15.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De acuerdo con su artículo 3, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:
- Los grupos de afectados cuando la Ley así lo declare expresamente.
 - Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.
 - Los grupos de afectados y los patrimonios independientes o autónomos cuando la Ley así lo declare expresamente.
 - Las uniones y entidades sin personalidad jurídica, los grupos de afectados y los patrimonios independientes o autónomos.
- 16.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De acuerdo con su artículo 5:
- La representación se presumirá para los actos y gestiones de mero trámite.
 - La representación deberá acreditarse para todos los actos y gestiones.
 - La representación deberá acreditarse sólo para presentar declaraciones responsables y comunicaciones.
 - La representación deberá acreditarse sólo para presentar declaraciones responsables y comunicaciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona.

17.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De acuerdo con su artículo 5,

- a) Las Administraciones Públicas podrán habilitar con carácter general o específico a personas físicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados.
- b) Las Administraciones Públicas podrán habilitar con carácter específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados.
- c) Las Administraciones Públicas podrán habilitar con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados.
- d) Las Administraciones Públicas podrán habilitar con carácter general o específico a personas jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados.

18.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De acuerdo con su artículo 7, cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán:

- a) Con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer término.
- b) Con todos y cada uno de ellos.
- c) Con los dos primeros interesados.
- d) Solo con el representante nombrado por todos ellos.

19.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De acuerdo con su artículo 10, en el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma (señale la opción INCORRECTA):

- a) Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de acreditadores de servicios de certificación».
- b) Cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan.
- c) Sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».
- d) Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».

20.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De acuerdo con su artículo 12, si alguno de los interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por

- a) Un funcionario de habilitación nacional mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello.
- b) Un funcionario del Servicio de Atención Ciudadana o equivalente de la Administración de que se trate mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello.
- c) Un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello.
- d) Un funcionario público con funciones de jefatura mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello.

21.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De acuerdo con su artículo 13, quienes tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos (señale la opción INCORRECTA):

- a) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente.
- b) A presentar los documentos que obren en poder de la Administración actuante.
- c) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.
- d) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.

22.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De acuerdo con su artículo 14, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos (señale la opción INCORRECTA):

- a) Las personas jurídicas.
- b) Las entidades sin personalidad jurídica.
- c) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración
- d) Las personas físicas.

23.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De acuerdo con su artículo 19, la comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos:

- a) Será obligatoria.
- b) Será obligatoria en las entidades locales.
- c) Sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley.
- d) Sólo será obligatoria para las personas jurídicas.

24.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Según su artículo 20, son responsables directos de la tramitación de los asuntos administrativos:

- a) El personal al servicio de las unidades de inspección.
- b) Los Directores de los Departamentos en las entidades locales.
- c) Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos.
- d) Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo el registro electrónico de los asuntos.

25.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De acuerdo con su artículo 21, la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla:

- a) En todos los procedimientos iniciados a instancia de parte.
- b) En todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.
- c) En todos los procedimientos iniciados por la propia Administración.
- d) Sólo en los procedimientos sancionadores.

26.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Según su artículo 22, el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos (señale la opción INCORRECTA):

- a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios.
- b) Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración.
- c) Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento.
- d) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimientes propuestos por los interesados.

27.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De acuerdo con su artículo 23, el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos:

- a) Es recurrible en reposición.
- b) Es recurrible.
- c) No es recurrible.
- d) Sólo es recurrible en los procedimientos sancionadores.

28.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De acuerdo con su artículo 24, el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos (señale la opción INCORRECTA):

- a) Cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público.
- b) En los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución.
- c) Que impliquen el ejercicio de actividades que puedan afectar a la organización municipal.
- d) De responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

29.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De acuerdo con su artículo 25, En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución producirá:

- a) La caducidad en los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras.
- b) La caducidad en los procedimientos de reconocimiento de derechos.
- c) La caducidad en los procedimientos de constitución de derechos.
- d) La caducidad en los procedimientos susceptibles de producir efectos favorables para el interesado.

30.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De acuerdo con su artículo 27, las copias auténticas:

- a) Tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales sólo si se hacen en las oficinas de asistencia en materia de registros.
- b) Tendrán la misma validez que los documentos originales pero no eficacia.
- c) Tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales
- d) Tendrán la misma eficacia que los documentos originales con validez limitada.

31.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De acuerdo con su artículo 28, las Administraciones exigirán a los interesados la presentación de:

- a) Documentos originales.
- b) Documentos originales cuando, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable lo establezca.
- c) Documentos no exigidos por la normativa aplicable.
- d) Informes preceptivos ya elaborados por un órgano administrativo distinto al que tramita el procedimiento.

32.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De acuerdo con su artículo 30, siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo:

- a) Los domingos y los declarados festivos.
- b) Los sábados, los domingos y los declarados festivos.
- c) Los domingos y los declarados festivos salvo las fiestas locales.
- d) Los sábados, los domingos y los declarados festivos salvo las fiestas locales.

33.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De acuerdo con su artículo 30, cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará:

- a) Inhábil en todo caso.
- b) Hábil en todo caso.
- c) Hábil en algunos casos.
- d) Inhábil en algunos casos.

34.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De acuerdo con su artículo 31, el funcionamiento del registro electrónico:

- a) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año hábiles durante las veinticuatro horas.
- b) Permitirá la presentación de documentos los días del año establecidos en el calendario oficial.
- c) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante el horario oficial de apertura de cada Administración.
- d) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas.

35.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De acuerdo con su artículo 35, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho (señale la opción INCORRECTA):

- a) Los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial.
- b) Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes.
- c) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
- d) Los actos que estimen pruebas propuestas por los interesados.

36.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De acuerdo con su artículo 40, a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga, cuando menos,

- a) El texto íntegro de la resolución que se pretende notificar.
- b) El texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado.
- c) El texto íntegro de la resolución, así como la notificación debidamente realizada.
- d) El texto con el contenido básico de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado.

37.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De acuerdo con su artículo 41, las notificaciones se practicarán por medios electrónicos:

- a) Preferentemente.
- b) Obligatoriamente.
- c) Discrecionalmente.
- d) Habitualmente.

38.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De acuerdo con su artículo 42, cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma:

- a) Cualquier persona mayor de dieciocho años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.
- b) Cualquier persona mayor de doce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.
- c) Cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.
- d) Cualquier persona mayor de dieciséis años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.

39.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De acuerdo con su artículo 43, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada:

- a) Cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
- b) Cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
- c) Cuando hayan transcurrido quince días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
- d) Cuando hayan transcurrido quince días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

40.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De acuerdo con su artículo 44, cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en:

- a) El Boletín Oficial del Estado.
- b) El Boletín Oficial del Estado y el Boletín Oficial de la Provincia
- c) El Boletín Oficial de la Provincia.
- d) El Boletín Oficial del Estado y el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.

41.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De acuerdo con su artículo 47, son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas (señale la opción INCORRECTA):

- a) Que tengan un contenido imposible.
- b) Que incurran en desviación de poder.
- c) Que sean constitutivos de infracción penal.
- d) Que sean dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.

42.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De acuerdo con su artículo 52, si el vicio de un acto anulable consistiese en la falta de alguna autorización, el otorgamiento de la misma por el órgano competente supondrá:

- a) La conversión de ese acto anulable.
- b) La convalidación de ese acto anulable.
- c) La conservación de ese acto anulable.
- d) La revocación de ese acto anulable.

43.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De acuerdo con su artículo 53, los interesados en un procedimiento administrativo, tienen los siguientes derechos (señale la opción INCORRECTA):

- a) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.
- b) A presentar documentos originales.
- c) A formular alegaciones.
- d) A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.

- 44.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De acuerdo con su artículo 62,
- La presentación de una denuncia confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento.
 - La presentación de una denuncia confiere, por sí sola, la condición de compareciente en el procedimiento.
 - La presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento.
 - La presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de compareciente en el procedimiento.
- 45.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De acuerdo con su artículo 66, cuando la Administración en un procedimiento concreto establezca expresamente modelos específicos de presentación de solicitudes, éstos serán de uso:
- Preferente por los interesados.
 - Discrecional por los interesados.
 - Voluntario por los interesados.
 - Obligatorio por los interesados.
- 46.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De acuerdo con su artículo 69, las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad,
- Desde el día siguiente a su presentación.
 - Desde el día de la emisión del informe técnico favorable.
 - Desde el día desde su admisión a trámite.
 - Desde el día de su presentación.
- 47.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De acuerdo con su artículo 70, las notas, opiniones y resúmenes:
- Forman parte del expediente administrativo.
 - No forman parte del expediente administrativo salvo que se incorporen electrónicamente.
 - No forman parte del expediente administrativo.
 - Forman parte del expediente administrativo con la consideración de informes técnicos si se incorporan al mismo.
- 48.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De acuerdo con su artículo 77, los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos:
- Harán prueba de estos hechos.
 - No harán prueba de estos hechos.
 - Harán prueba de estos hechos en determinados procedimientos.
 - Harán prueba de estos hechos salvo que se acredite lo contrario.
- 49.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De acuerdo con su artículo 80, salvo disposición expresa en contrario, los informes serán
- Preceptivos y vinculantes.
 - Facultativos y no vinculantes.
 - Preceptivos y no vinculantes.
 - Facultativos y vinculantes.
- 50.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De acuerdo con su artículo 95, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que se producirá la caducidad del procedimiento:
- Transcurridos tres meses.
 - Transcurridos seis meses.
 - Transcurridos dos meses.
 - Transcurrido un mes.
- 51.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De acuerdo con su artículo 100, son medios de ejecución forzosa de las Administraciones Públicas (señale la opción INCORRECTA):
- Ejecución subsidiaria.
 - Multa coercitiva.
 - Requerimiento a los interesados.
 - Apremio sobre el patrimonio.

- 52.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De acuerdo con su artículo 107, la declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos:
- Cinco años desde que se dictó el acto administrativo.
 - Tres años desde que se dictó el acto administrativo.
 - Dos años desde que se dictó el acto administrativo.
 - Cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.
- 53.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De acuerdo con su artículo 124, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición será de :
- Dos meses.
 - Un mes.
 - Treinta días hábiles.
 - Tres meses.
- 54.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De acuerdo con su artículo 125, el plazo para interponer el recurso extraordinario de revisión, salvo que concurra error de hecho, será de:
- Dos meses.
 - Un mes.
 - Treinta días hábiles.
 - Tres meses.
- 55.- Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Según su artículo 9, son autores:
- Las personas físicas o jurídicas que realicen el hecho tipificado por sí solas, conjuntamente o por medio de otra de la que se sirvan como instrumento.
 - Las personas físicas que realicen el hecho tipificado por sí solas, conjuntamente o por medio de otra de la que se sirvan como instrumento.
 - Las personas jurídicas que realicen el hecho tipificado por sí solas, conjuntamente o por medio de otra de la que se sirvan como instrumento.
 - Las personas físicas o jurídicas que realicen el hecho tipificado, conjuntamente o por medio de otra de la que se sirvan como instrumento.
- 56.- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Según su artículo 9, relativo a la delegación de competencias (señale la opción INCORRECTA):
- Salvo autorización expresa de una Ley, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación.
 - La delegación de competencias será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido.
 - Deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Estado», en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano delegante, y el ámbito territorial de competencia de éste.
 - Cabe la delegación de competencias para la adopción de disposiciones de carácter general.
- 57.- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Según su artículo 23, tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar es motivo de:
- Revocación.
 - Abstención.
 - Convalidación.
 - Recurso.
- 58.- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Según sus artículos 25 a 29, son principios de la potestad sancionadora (señale la opción INCORRECTA):
- Retroactividad.
 - Responsabilidad.
 - Proporcionalidad.
 - Tipicidad.
- 59.- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Según su artículo 30, Si las leyes que las establezcan no fijan plazos de prescripción, la infracciones leves prescribirán:
- A los dos años.
 - Al año.
 - A los seis meses.
 - A los nueve meses.

60.- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Según su artículo 48, los convenios se perfeccionan por:

- a) Su aprobación por el órgano competente.
- b) La notificación de su aprobación por el órgano competente.
- c) La prestación del consentimiento de las partes.
- d) Su publicación en la sede electrónica.

61.- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Según su artículo 53, los convenios deberán remitirse electrónicamente al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma:

- a) Cuando sus compromisos económicos asumidos superen los 600.000 euros.
- b) Cuando sus compromisos económicos asumidos superen los 800.000 euros.
- c) Cuando sus compromisos económicos asumidos superen los 500.000 euros.
- d) Cuando sus compromisos económicos asumidos superen los 100.000 euros.

62.- Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Según su artículo 2, El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con (señale la opción INCORRECTA):

- a) Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público, adoptados en el ejercicio de funciones públicas.
- b) Los contratos administrativos.
- c) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas.
- d) Las cuestiones expresamente atribuidas al orden jurisdiccional civil cuando estén relacionadas con la actividad de la Administración pública.

63.- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Según su artículo 29, La prórroga de los contratos se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca:

- a) Al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor.
- b) Con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato.
- c) Al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato.
- d) Con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor.

64.- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Según su artículo 37,

- a) Las entidades del sector público no podrán contratar verbalmente.
- b) Las entidades del sector público no podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga carácter de emergencia.
- c) Las entidades del sector público podrán contratar verbalmente los contratos menores.
- d) Las entidades del sector público podrán contratar verbalmente previa comunicación a su órgano de contratación.

65.- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Según su artículo 44, la interposición del recurso especial en materia de contratación:

- a) Tendrá carácter preceptivo para los recurrentes.
- b) Tendrá carácter preceptivo para los recurrentes si se funda en causas de nulidad.
- c) Tendrá carácter potestativo para los recurrentes si se interpone contra actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación.
- d) Tendrá carácter potestativo para los recurrentes.

66.- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Según su artículo 62, la persona física o jurídica designada por los órganos de contratación a la que corresponderá supervisar la ejecución del contrato y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada se denomina:

- a) Administrador del contrato.
- b) Responsable del contrato.
- c) Supervisor del contrato.
- d) Defensor del contrato.

67.- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Según su artículo 63, la publicación en el perfil del contratante de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos :

- a) Mensualmente.
- b) Anualmente.
- c) Semestralmente.
- d) Trimestralmente.

68.- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Según su artículo 64, cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación, que además participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación se refiere al concepto de:

- a) Fraude.
- b) Conflicto de interés.
- c) Corrupción.
- d) Conflicto de contratación.

69.- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Según su artículo 101, el valor estimado de los contratos estará determinado en el caso de los contratos de obras, suministros y servicios:

- a) Por el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido.
- b) Por el importe total, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
- c) Por el importe neto de la cifra de negocios, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
- d) Por el importe neto de la cifra de negocios, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido.

70.- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Según su artículo 118, Se consideran contratos menores cuando se trate de contratos de suministro o de servicios:

- a) Los de valor estimado inferior a 15.000 euros.
- b) Los de valor estimado inferior a 40.000 euros.
- c) Los de valor estimado igual a 15.000 euros.
- d) Los de valor estimado igual a 40.000 euros.

71.- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Según su artículo 131, la adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de:

- a) Mejor relación calidad-coste
- b) Mejor oferta económica.
- c) Mejor oferta.
- d) Mejor relación calidad-precio.

72.- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Según su artículo 159, los órganos de contratación podrán acordar la utilización de un procedimiento abierto simplificado en los contratos de:

- a) Suministro y servicios.
- b) Obras, suministro y servicios.
- c) Suministro, servicios y concesiones de servicios.
- d) Obras, concesiones de obras, suministro y servicios.

73.- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Según su artículo 190, la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento la ostenta:

- a) El órgano de contratación.
- b) La mesa de contratación.
- c) El responsable del contrato.
- d) Las unidades o servicios administrativos de las que dependa el contrato.

74.- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Según su artículo 326, la mesa de contratación :

- a) Es un órgano de gobierno.
- b) Es un órgano de resolución de recursos en materia de contratación.
- c) Es un órgano de asistencia técnica especializada en materia de contratación.
- d) Es un órgano directivo .

75.- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Según su artículo 39, los órganos específicos de representación de los funcionarios son:

- a) Los Delegados de Personal y las Juntas de Personal.
- b) Los Delegados de Personal y las Juntas Laborales.
- c) Las Juntas de Personal.
- d) Las Mesas de Negociación.

- 76.- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Según su artículo 52, los empleados públicos deberán actuar con arreglo a los siguientes principios (señale la opción INCORRECTA):
- Honradez.
 - Buen gobierno.
 - Accesibilidad.
 - Transparencia.
- 77.- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Según su artículo 78, la provisión de puestos de trabajo en cada Administración Pública se llevará a cabo por los procedimientos:
- De concurso con convocatoria pública.
 - De libre designación con convocatoria pública.
 - De concurso y de libre designación con convocatoria pública.
 - De concurso con convocatoria pública y libre designación sin convocatoria pública.
- 78.- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Según su artículo 98, la imposición de sanciones disciplinarias por faltas leves se llevará a cabo por:
- Procedimiento sumario con audiencia al interesado.
 - Procedimiento abreviado con audiencia al interesado.
 - Procedimiento ejecutivo con audiencia al interesado.
 - Procedimiento simplificado con audiencia al interesado.
- 79.- Constitución Española. Según su artículo 133, las Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos:
- De acuerdo con la Constitución, las leyes y los tribunales.
 - De acuerdo con las leyes.
 - De acuerdo con la Constitución y los tribunales.
 - De acuerdo con la Constitución y las leyes.
- 80.- Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Según su artículo 3, constituye el hecho imponible del Impuesto de Bienes Inmuebles la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales (señale la opción INCORRECTA):
- De un derecho real de superficie.
 - De un derecho de arrendamiento sobre los propios inmuebles.
 - De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles.
 - De un derecho real de usufructo.
- 81.- Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Según su artículo 3, constituye el hecho imponible del Impuesto: la titularidad de los vehículos de tracción mecánica, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría, cuando:
- El domicilio que conste en el permiso de circulación sea en el municipio de Vitoria-Gasteiz.
 - El domicilio que conste en el carnet de conducir del titular del vehículo sea en el municipio de Vitoria-Gasteiz.
 - El domicilio del titular del vehículo que conste en el padrón municipal sea en el municipio de Vitoria-Gasteiz.
 - El domicilio del titular del vehículo que conste en la Dirección General de Tráfico sea en el municipio de Vitoria-Gasteiz.
- 82.- Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas. De acuerdo con su artículo 6, están exentos del impuesto:
- Los sujetos pasivos que tengan un volumen de operaciones inferior a 2.000.000 de euros.
 - Los sujetos pasivos que tengan un volumen de operaciones inferior a 1.000.000 de euros.
 - Los sujetos pasivos que tengan un volumen de operaciones igual o inferior a 2.000.000 de euros.
 - Los sujetos pasivos que tengan un volumen de operaciones igual o inferior a 1.000.000 de euros.
- 83.- Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Según su artículo 7, la base imponible de este impuesto estará constituida por el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de:
- Diez años
 - Quince años
 - Veinte años
 - Veinticinco años.

84.- Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava. Según su artículo 41, la responsabilidad tributaria será siempre:

- a) Subsidiaria.
- b) Solidaria, salvo precepto legal expreso en contrario.
- c) Solidaria.
- d) Subsidiaria, salvo precepto legal expreso en contrario.

85.- Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava. Según su artículo 118, son procedimientos de gestión tributaria (señale la opción INCORRECTA):

- a) El procedimiento de comprobación de valores.
- b) El procedimiento para la aplicación de la cláusula antielusión.
- c) El procedimiento iniciado mediante declaración.
- d) El procedimiento de liquidación de la deuda tributaria iniciado de oficio.

86.- Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava. Según su artículo 40, la disposición o compromiso del gasto es el acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos, previamente autorizados:

- a) Por un importe cierto o aproximado
- b) Por un importe estimado.
- c) Por un importe fijado.
- d) Por un importe exactamente determinado.

87.- Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. Según su artículo 10, se entiende por clasificación del suelo la vinculación por la ordenación urbanística estructural de superficies concretas al régimen legal propio de las siguientes clases:

- a) Urbano, urbanizable y no urbanizable.
- b) Urbano, urbanizable y reurbanizable.
- c) Urbano, urbanizable y rústico.
- d) Urbano, urbanizable y no consolidado.

88.- Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. Según su artículo 59, son planes de ordenación pormenorizada (señale la opción INCORRECTA):

- a) Planes especiales, en desarrollo de la ordenación estructural de los planes generales o autónomos respecto a los mismos.
- b) Planes especiales de ordenación urbana, que tienen por objeto la ultimación de la ordenación en áreas determinadas en suelo urbano.
- c) Planes de sectorización.
- d) Planes parciales.

89.- Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. Según su artículo 87, los documentos de planeamiento urbanístico que definan los criterios, objetivos, alternativas y propuestas generales de la ordenación a establecer y que sirvan de orientación para la redacción de dichos planes cuando se pretenda la primera elaboración del plan general o cuando se proyecte la revisión total o parcial de uno vigente, se denominan:

- a) Estudios de detalle.
- b) Avances.
- c) Documentos urbanísticos previos.
- d) Memorias urbanísticas previas,

90.- Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. Según su artículo 162, contra los acuerdos de la junta de concertación podrá interponerse ante el Ayuntamiento:

- a) Recurso de alzada
- b) Recurso de reposición.
- c) Recurso extraordinario de revisión.
- d) Recurso indirecto.

91.- Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. Según su artículo 210, el procedimiento de otorgamiento de licencia urbanística se iniciará:

- a) De oficio.
- b) A instancia del interesado.
- c) De oficio y a instancia del interesado.
- d) De oficio y a requerimiento del Colegio de Arquitectos.

92.- Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa. Según su artículo 9, para proceder a la expropiación forzosa será indispensable la previa:

- a) Consignación del justo precio.
- b) Declaración de utilidad pública o interés social del fin a que haya de afectarse el objeto expropiado.
- c) Notificación a todos los interesados.
- d) Apertura de información pública.

93.- Ley 3/1998, de 27 de febrero, de protección general del Medio Ambiente del País Vasco. Según su artículo 1, constituyen el medio ambiente en el que se desarrolla la vida humana:

- a) El aire, el agua, el suelo, la biodiversidad, la flora y la fauna, con sus parámetros e interrelaciones adecuadas.
- b) El aire, el agua, el suelo, los montes, la flora y la fauna, con sus parámetros e interrelaciones adecuadas.
- c) El aire, el agua, el suelo, el paisaje, la luz, la flora y la fauna, con sus parámetros e interrelaciones adecuadas.
- d) El aire, el agua, el suelo, el paisaje, la flora y la fauna, con sus parámetros e interrelaciones adecuadas.

94.- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. Según su artículo 3, los planes encaminados a afrontar las cuestiones relativas al ruido y a sus efectos, incluida la reducción del ruido si fuere necesario, se denominan:

- a) Planes de actuación.
- b) Planes acústicos.
- c) Planes de evaluación acústica.
- d) Planes de acción.

95.- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Según su artículo 3, cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función en la instalación o en la economía en general se denomina:

- a) Reutilización.
- b) Eliminación.
- c) Valorización.
- d) Regeneración.

96.- Ley 3/1998, de 27 de febrero, de protección general del Medio Ambiente del País Vasco. Según su artículo 59, el informe de medidas correctoras al proyecto de instalación o ampliación de la actividad solicitada será:

- a) Vinculante para la autoridad municipal cuando sea contrario a la concesión de la licencia de actividad, así como cuando determine la necesidad de imposición de medidas correctoras.
- b) Vinculante para la autoridad municipal cuando proceda la concesión de la licencia de actividad, así como cuando determine la necesidad de imposición de medidas correctoras.
- c) Vinculante para la autoridad municipal cuando sea contrario a la concesión de la licencia de actividad.
- d) Vinculante para la autoridad municipal cuando determine la necesidad de imposición de medidas correctoras.

97.- Ley 3/1998, de 27 de febrero, de protección general del Medio Ambiente del País Vasco. Según su artículo 62 bis, la comunicación previa de actividad clasificada, vendrá acompañada de la siguiente documentación:

- a) Una memoria descriptiva de la actividad.
- b) Un certificación de persona técnica competente de cumplimiento de todos los requisitos ambientales.
- c) Los dos documentos anteriores (letras a y b).
- d) Un proyecto de actividad y un certificación de persona técnica competente de cumplimiento de todos los requisitos ambientales .

98.- Ley 3/1998, de 27 de febrero, de protección general del Medio Ambiente del País Vasco. Según su artículo 64, están facultados para decretar la suspensión o clausura de las actividades ilícitas, la revocación de las licencias y la imposición de las sanciones legalmente determinadas:

- a) La Junta de Gobierno Local.
- b) Los alcaldes o alcaldesas.
- c) El Pleno municipal.
- d) Las Comisiones de Pleno.

99.- Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Según su artículo 11, las restricciones cuantitativas o territoriales y, concretamente, los límites fijados en función de la población o de una distancia mínima entre prestadores son:

- a) Requisitos prohibidos.
- b) Requisitos de interés particular sujetos a consideración preliminar.
- c) Requisitos transparentes.
- d) Requisitos de aplicación excepcional sujetos a evaluación previa.

100.- Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios. Según su artículo 2, las disposiciones contenidas en el Título I de esta Ley se aplicarán a las actividades comerciales minoristas y a la prestación de determinados servicios previstos en el anexo de esta Ley, cuya superficie útil de exposición y venta al público:

- a) No sea superior a 600 metros cuadrados.
- b) No sea superior a 650 metros cuadrados.
- c) No sea superior a 700 metros cuadrados.
- d) No sea superior a 750 metros cuadrados.

101.- Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. Según su artículo 17, se podrá establecer la exigencia de una autorización siempre que concurran los principios de:

- a) Necesidad y seguridad.
- b) Necesidad y proporcionalidad.
- c) Necesidad y cooperación.
- d) Necesidad y unidad.

102.- Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. Según su artículo 26, el procedimiento en defensa de los derechos e intereses de los operadores económicos por las autoridades competentes tiene carácter:

- a) Preceptivo.
- b) Subsidiario.
- c) Alternativo.
- d) Principal.

103.- Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Según su artículo 26, procede la emisión de informe del órgano autonómico competente en espectáculos en los procedimientos para la obtención de la licencia de actividad clasificada de establecimientos con capacidad o aforo previsto superior a:

- a) 300 personas.
- b) 500 personas.
- c) 600 personas.
- d) 700 personas.

104.- Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Según su artículo 39, la comunicación previa de espectáculo público o actividad recreativa debe presentarse con un periodo mínimo de antelación en relación con el inicio de dicho espectáculo o actividad de:

- a) Diez días
- b) Quince días
- c) Veinte días.
- d) Treinta días.

105.- Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco. Según su artículo 24, la Ertzaintza se constituye orgánicamente en un Cuerpo único en el que se integran los Cuerpos de:

- a) Miñones, Locales y Mikeletes.
- b) Miñones, Guardias y Mikeletes.
- c) Miñones, Forales y Mikeletes.
- d) Miñones, Forales y Guardias.

106.- Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco. Según su artículo 116, salvo carácter excepcional, podrán crear Cuerpos de Policía propios los municipios del País Vasco que tengan una población igual o superior a:

- a) Cinco mil habitantes.
- b) Diez mil habitantes.
- c) Quince mil habitantes.
- d) Veinte mil habitantes.

107.- Decreto Legislativo 1/2017, de 27 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Gestión de Emergencias. Según su artículo 48, la subescala operativa del personal de cada servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento comprende las categorías de (señale la opción INCORRECTA):

- a) Oficial.
- b) Subinspector o subinspectora.
- c) Sargento.
- d) Suboficial.

108.- Decreto Legislativo 1/2017, de 27 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Gestión de Emergencias. Según su artículo 50, en el ejercicio de sus funciones, los miembros de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento tendrán la consideración de agentes de la autoridad cuando:

- a) Estén de servicio siempre que acrediten previamente su condición.
- b) Estén libres de servicio pero acrediten previamente su condición.
- c) Estén de servicio o, cuando, estando libres del mismo, intervengan en cualquier tipo de siniestro, siempre que acrediten previamente su condición.
- d) Estén de servicio o, cuando, estando libres del mismo, intervengan en cualquier tipo de siniestro,

109.- Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco. Según su artículo 9, son clases de entidades deportivas (señale la opción INCORRECTA):

- a) Agrupación deportiva.
- b) Centro deportivo.
- c) Club deportivo.
- d) Federación deportiva.

110.- Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco. Según su artículo 45, las competiciones deportivas, oficiales o no oficiales, podrán ser organizadas por:

- a) Cualesquiera personas jurídicas, públicas o privadas.
- b) Cualesquiera personas jurídicas privadas.
- c) Cualesquiera personas jurídicas, públicas o privadas.
- d) Cualesquiera personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.

111.- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Según su artículo 18, operará como sistema nacional de publicidad de subvenciones:

- a) La Base de Datos Nacional de Subvenciones.
- b) La Base Nacional de Subvenciones.
- c) La Base Nacional de Datos de Subvenciones.
- d) La Base Nacional de Datos y Subvenciones.

112.- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Según su artículo 34, los pagos que supondrán entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención se denominan:

- a) Pagos a cuenta.
- b) Pagos anticipados.
- c) Pagos retenidos.
- d) Pagos previos.

113.- Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales. Según su artículo 59, para poder intervenir en la provisión y prestación de servicios sociales requerirán:

- a) Inscripción en el Registro de Servicios Sociales.
- b) Inscripción en el Registro de Servicios Sociales y autorización administrativa.
- c) Inscripción en el Registro de Servicios Sociales, autorización administrativa y previa homologación.
- d) Inscripción en el Registro de Servicios Sociales, autorización administrativa, previa homologación y convenio de colaboración.

114.- Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales. Según su artículo 74, la declaración de interés social de las entidades sin ánimo de lucro dedicadas a la prestación de servicios sociales corresponderá:

- a) Al Gobierno Vasco.
- b) A las Diputaciones.
- c) A los Ayuntamientos.
- d) Al Consejo Vasco de Servicios Sociales.

115.- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Según su artículo 24, la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se interpondrá en el plazo de:

- a) 30 días a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
- b) Tres meses a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
- c) Un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
- d) Dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.

116.-Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Según su artículo 29, el abuso de autoridad en el ejercicio del cargo constituye una infracción disciplinaria:

- a) Leve
- b) Grave.
- c) No es infracción disciplinaria.
- d) Muy grave.

117.- Tratado de la Unión Europea. Según su artículo 14, el Parlamento Europeo estará compuesto por representantes de los ciudadanos de la Unión cuyo número no excederá de:

- a) Quinientos cincuenta, más el Presidente
- b) Quinientos.
- c) Setecientos cincuenta, más el Presidente.
- d) Setecientos cincuenta.

118.- Tratado de la Unión Europea. Según su artículo 15, el Consejo Europeo:

- a) No ejercerá función legislativa alguna.
- b) Ejercerá funciones ejecutivas.
- c) Ejercerá funciones presupuestarias.
- d) Ejercerá funciones legislativas.

119.-Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Según su artículo 253, los jueces y los abogados generales del Tribunal de Justicia serán designados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros por un período de

- a) Tres años.
- b) Cuatro años.
- c) Cinco años.
- d) Seis años.

120.-Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Según su artículo 288, los actos jurídicos de la Unión que no serán vinculantes son:

- a) Decisiones y recomendaciones.
- b) Decisiones y dictámenes.
- c) Recomendaciones y dictámenes.
- d) Recomendaciones y directivas.